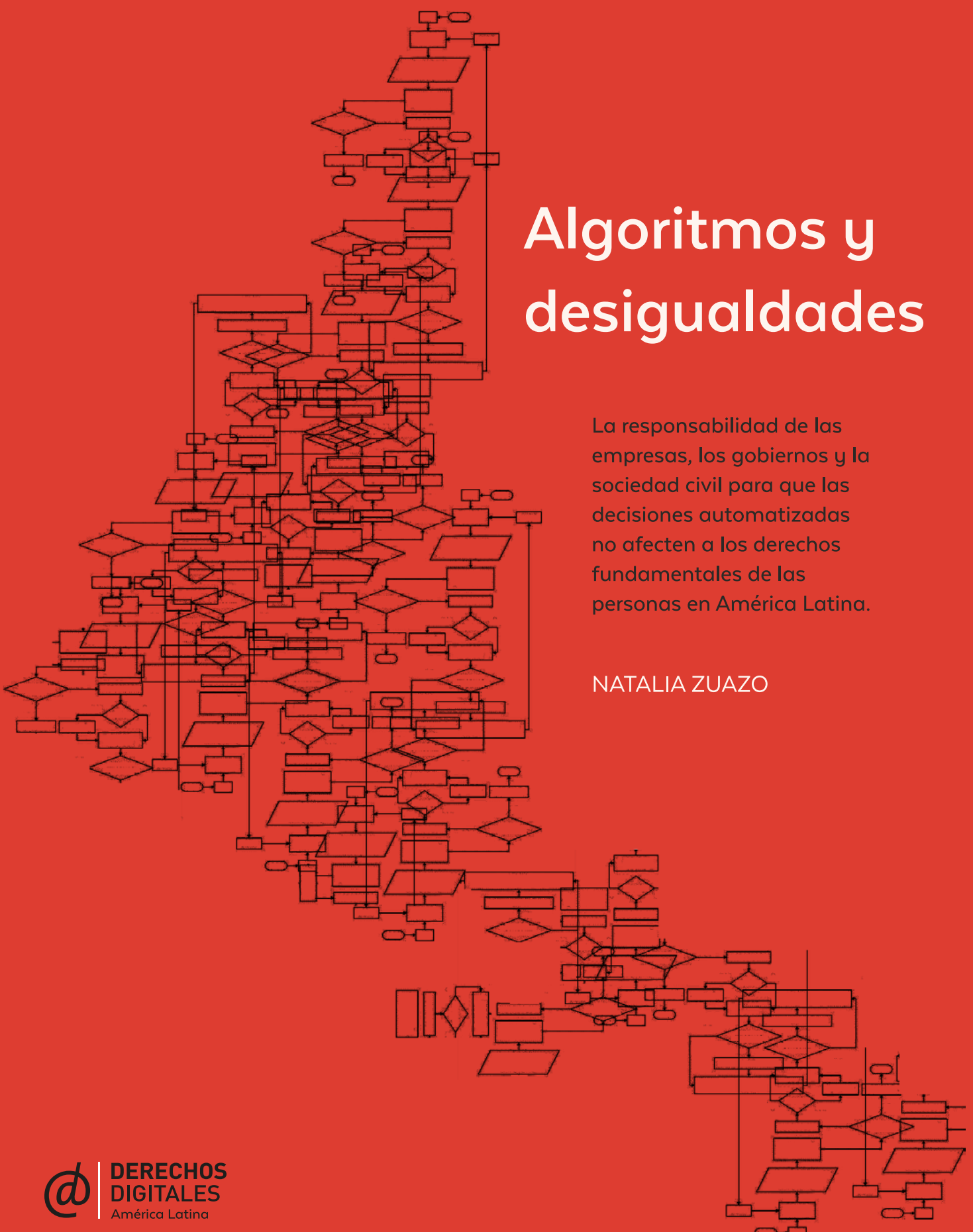




Algoritmos y desigualdades

La responsabilidad de las empresas, los gobiernos y la sociedad civil para que las decisiones automatizadas no afecten a los derechos fundamentales de las personas en América Latina.

NATALIA ZUAZO



Este informe fue realizado por Derechos Digitales, con el apoyo de la Asociación para el progreso de las comunicaciones (APC)

Texto por Natalia Zuazo

Traducción por Alexandra Argüelles

Diseño y diagramación por Constanza Figueroa



Esta obra está disponible bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 Internacional (CC BY 4.0):
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Noviembre, 2018

Algoritmos y desigualdades

La responsabilidad de las empresas, los gobiernos y la sociedad civil para que las decisiones automatizadas no afecten a los derechos fundamentales de las personas en América Latina.

*Natalia Zuazo*¹

La publicidad adora comenzar cada año con un título que les augure buenas ventas a sus empresas. En 2018, el lema sin dudas fue “el año de la inteligencia artificial”. El pronóstico anual de Microsoft decía: “la IA se consolida como una realidad y herramienta clave en varios sectores, impulsando el motor de recomendaciones online, actuando como asistente de chat virtual para una cuenta bancaria o agente de viajes, personalizando un suministro de noticias o protegiendo tarjetas de crédito contra el fraude”.² Intel predecía que estas tecnologías “no solo continuarán ayudando a un número creciente de empresas a tomar mejores decisiones de negocios al extraer datos vitales, sino que también se integrarán en más dispositivos de consumo”.³ Para la consultora Pricewaterhouse, las compañías y los gobiernos tienen el desafío de preparar sus “estructuras y habilidades para la colaboración entre hombres y máquinas”. Si lo hacen, tendrán una ventaja para llevarse los beneficios económicos de la cooperación o –en sus palabras– “una tajada del pastel”.⁴

El mundo de los negocios se regocija con los beneficios económicos que les ofrece el salto en la acumulación de datos y el creciente uso de las distintas tecnologías de procesamiento para tomar decisiones automatizadas. Y con razón: los negocios son su objetivo y razón de ser. Sin embargo, junto con cada “era dorada” de la tecnología también es necesario analizar la responsabilidad de las empresas, el rol de los gobiernos y el de la sociedad civil. También, cómo los Estados, en alianza con privados que proveen soluciones automatizadas a decisiones que involucran datos públicos, pueden afectar derechos humanos. En el caso de América Latina, la tarea es doblemente importante, ya que las grandes corporaciones internacionales despliegan en nuestros países sus avances con la artillería del marketing de lo inexorable.

1 Politóloga (UBA). Periodista (UTdT). Autora de “Guerras de internet” y “Los dueños de internet” (Debate, 2015 y 2018). Directora de Salto, agencia tecnopolítica.

2 <https://blogs.microsoft.com/latinx/2018/02/22/2018-el-ano-de-la-inteligencia-artificial/>

3 <https://www.intel.co.uk/content/www/uk/en/it-managers/2018-tech-trends-ai.html>

4 <https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/artificial-intelligence-predictions.html>

La investigación independiente

En abril de 2018, la misma semana en la que comenzaba en el Congreso argentino el debate sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, dijo que su gobierno está trabajando en un software que utiliza inteligencia artificial para saber si las mujeres de su provincia pueden quedar embarazadas. “Con la tecnología se pueden prever qué niñas están en un 86 por ciento predestinadas a tener un embarazo adolescente”, manifestó el funcionario. En la misma entrevista, expresó que su administración estaba haciendo el trabajo con una gran compañía de tecnología. Los días siguientes, gracias a la difusión de algunos periodistas argentinos, se publicó en internet el código involucrado en el sistema, perteneciente a la empresa Microsoft. En el algoritmo de predicción de embarazo se pudo evidenciar que no existían preguntas sobre anticoncepción ni educación sexual. Pero sí otras como edad, etnia, estudios, barrio de residencia, discapacidad, país de origen y abandono de estudios.

El modelo, entonces, replicaba un sesgo, un prejuicio, de asociar el embarazo a la pobreza, e incluso a una promiscuidad propia de etnias y lugares. Gracias a la investigación periodística independiente⁵ pudo conocerse además que detrás del “modelo predictivo” se encontraba una fundación de fuertes lazos con la iglesia católica, a la que se había convocado de una manera opaca.

Junto con el informe periodístico, el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires alertó que se trataba de una decisión algorítmica basada en prejuicios:⁶ “Tanto los problemas metodológicos como los datos poco confiables plantean el riesgo de tomar medidas incorrectas a los responsables de políticas públicas”.

Plataformas, información, ética y derecho a la explicación

Durante la Reunión Preparatoria para el Foro de Gobernanza de Internet celebrada en Buenos Aires del 31 de julio al 2 de agosto de 2018 se desarrolló la sesión “Desafíos y oportunidades para enfrentar las desigualdades de nuestra región propuestos por el uso masivo de algoritmos y la toma de decisiones automatizadas. Responsabilidad de las empresas, el rol de los Gobiernos y de la Sociedad Civil”. Con la moderación de Paz Peña (Acoso Online, Chile), contó con las participaciones de Gustavo Gómez (Observacom, Uruguay), Eduardo Magrani (ITS RIO, Brasil), Alejandro Delgado (Comisión de Regulación de Comunicaciones, Colombia) y quien esto escribe. El sector privado, convocado al debate, no estuvo presente en la sesión.

Como introducción, Paz Peña señaló que en las sociedades de datos las decisiones guiadas por algoritmos están sucediendo ahora. Por lo tanto, nuestro compromiso por pensar y actuar respecto de sus consecuencias para los derechos fundamentales de las personas debe ser ahora, y no un “reto del futuro”. Advirtió que la gobernanza de las fórmulas y los datos se está dando tanto por medio de privados como por parte de los Estados. Por lo tanto, debemos cuestionar, en principio, la supuesta objetividad de los algoritmos. Y, luego, como ciudadanos latinoamericanos, preguntarnos si podemos desafiar las decisiones tecnológicas que se toman en el norte global, pero que ciertamente tienen consecuencias en nuestra región.

Para Gustavo Gómez, la influencia de las decisiones automatizadas que toman las plataformas de información como Facebook debe ser analizada por sus consecuencias sobre la libertad de expresión. El director de Ob-

5 <https://www.youtube.com/watch?v=xyLuxPhCgBw>

6 [https://www.dropbox.com/s/r7w4hln3p5xum3v/\[LIAA\]%20Sobre%20la%20predicci%C3%B3n%20autom%C3%A1tica%20de%20embarazos%20adolescentes.pdf?dl=0](https://www.dropbox.com/s/r7w4hln3p5xum3v/[LIAA]%20Sobre%20la%20predicci%C3%B3n%20autom%C3%A1tica%20de%20embarazos%20adolescentes.pdf?dl=0)

servacom notó que los grandes intermediarios, aun cuando aleguen que gran parte de la moderación sobre su plataforma la realizan mediante algoritmos, en realidad ocultan que priorizan, remueven o eliminan contenidos según criterios que ellos mismos fijan bajo normas de “autoregulación”. Sin embargo, señaló, es necesario limitar estos poderes o encontrar una combinación entre la regulación, la co-regulación y la autoregulación, ya que el poder de estas empresas afecta al interés público. “No pueden seguir diciendo que son simples intermediarias, porque, por ejemplo, para luchar contra las noticias falsas no solo toman medidas como la de ofrecer contexto sobre una información para que el usuario decida, sino que también dan de baja otros contenidos”. Gómez explicó que una empresa como Facebook asume su rol de no-intermediario al publicar sus informes de transparencia; en el reporte de 2018 admitieron haber eliminado 583 millones de cuentas falsas, removido 3 millones y medio de “publicaciones con contenido violento” y, en algunos casos, el 96 por ciento de las bajas se realiza a través de mecanismos automatizados.⁷

En su intervención, Eduardo Magrani se preguntó cuánta ética hay en la cantidad creciente de objetos conectados a internet que intercambian datos para funcionar. Indagó en los efectos que el aprendizaje automático tiene, por ejemplo, en los dispositivos hogareños como Alexa, que acostumbraron a niños y niñas a hablar dando órdenes y tuvieron que incorporar funciones para “pedir por favor” y así evitar malos hábitos.⁸ Así como antes ya nos dimos el debate sobre incorporar una seguridad por diseño a la tecnología, Magrani introdujo la necesidad de una ética *by design*.

“¿Qué ética debemos tener como parámetro? Una ontológica, orientada a los derechos humanos, donde no nos pensemos solo como seres influenciables, sino también como capaces de incidir en la tecnología. El camino ya propuesto es el de la ética utilitarista, que no respeta derechos”, dijo. El investigador brasileiro propuso que antes de lanzar al mercado productos que tomen datos y los procesen bajo respuestas de bots, se garanticen pruebas para que no se repitan sesgos o discursos de odio, especialmente si se trabaja con información pública.

Desde su visión del Estado en Colombia, Alejandro Delgado apuntó a implementar mecanismos de transparencia que permitan dar cuenta de cómo un algoritmo toma una decisión. Al respecto, valoró positivamente el Reglamento General de Protección de datos de Europa, que establece que si los datos personales se utilizan para tomar decisiones automáticas sobre las personas, las empresas deben poder explicar la lógica detrás del proceso. Señaló además que existen casos donde la implementación de una decisión algorítmica debe prohibirse, si afecta derechos o viola leyes locales. Como ejemplo, señaló el caso de aplicaciones que detectan la presencia de policías en las carreteras y alertan a los conductores para evitarlos, cometiendo ilícitos.

Una mirada al futuro

Algunas cuestiones que resultan importantes al momento de analizar otras futuras decisiones automatizadas en nuestra región. La primera es si contamos con asesores tecnopolíticos capaces de considerar quiénes ganan y quiénes pierden con las decisiones, y, en caso de ser necesario, limitar el alcance de la automatización. En este sentido, es importante ampliar las capacidades de control de distintos actores (entre ellos la sociedad civil, las universidades y centros de estudios especializados) respecto de las alianzas público-privadas, que muchas veces se toman a espaldas del interés general, generando desigualdades producto de la automatización de procesos a partir del uso de datos masivos.

7 <https://ltam.newsroom.fb.com/news/2018/05/facebook-publica-informe-sobre-remocion-de-contenido/>

8 <https://www.bbc.co.uk/news/technology-43897516>

La segunda es qué actores privados están involucrados en las decisiones sobre temas públicos, cómo acceden a los negocios y quiénes los controlan. La tercera es a quién se convoca para auditar las decisiones automatizadas. En este sentido, consideramos que la sociedad civil, las universidades y organismos reguladores deben ser tenidos en consideración para esta tarea.

Por último, y no por ello menos importante, es central preguntarnos cuánto sabemos los ciudadanos respecto de las decisiones que toman los algoritmos diariamente sobre nuestras vidas en América Latina. Si la respuesta es “poco” o “nada”, tenemos una tarea pendiente a resolver. Si esa tarea implica limitar a los poderes, tendremos que establecer alianzas locales con otros actores para que las decisiones estén más en nuestras manos. De eso, finalmente, se trata la soberanía.

